

Los protocolos para el voto trans en América Latina: medidas de nivelación para subsanar las deficiencias del modelo de ciudadanía liberal

Ericka López Sánchez

Doctora en Estudios Sociales con especialidad en Procesos Políticos

Profesora investigadora de tiempo completo del Depto. de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato.

ericka.lopez@ugto.mx

1. Introducción

La existencia de los cuatro Protocolos para el voto trans en América Latina y el Caribe dan cuenta de los términos y condiciones que delimitan a la condición ciudadana, pues ésta no es universal y entre los numerosos requisitos que hay que cumplir para ejercerla existe la disposición de ser una persona cisgénero; es decir, que la persona se identifique con el sexo asignado al momento de nacer, que exista una correspondencia jurídica entre el sexo que el médico o la médica registró en el momento del nacimiento y la documentación legal subsecuente.

La condición ciudadana cis se encuentra legitimada desde un andamiaje legal que no contempla la transición de los sexos, ni la autopercepción que tienen las personas de sí mismas. Las personas trans y no binarias resultan ser una amenaza para ese orden legal que da certeza y garantía a las personas cisgénero. No obstante, estos marcos de comprensión cissexistas poseen lagunas hermenéuticas para comprender que los sexos no son inamovibles y que un principio de la máxima del libre desarrollo de la personalidad es la autopercepción de las personas con relación a su identidad de género.

Las demandas históricas de las personas trans han fisurado los monolitos cissexistas con los que han operado los derechos humanos, logrando crear principios legales de carácter internacional que instruyen a los Estados-nación a reconocer el derecho a la identidad de las personas trans y con ello otros derechos más que reparen las condiciones de abyección

humana entre las que se encuentran las discriminaciones y violencias que padecen al momento de querer ejercer su derecho a sufragar.

Bajo este contexto el interés del presente trabajo estriba en explicar desde una forma comparada las condiciones jurídicas, político-electorales y sociales bajo las cuales surgen los cuatro protocolos del voto trans que existen en la región. Es de suma relevancia recuperar la memoria histórica reciente de la elaboración de estos instrumentos electorales que han posibilitado en los últimos cuatro años que las personas trans puedan votar.

Se pretende comprender las situaciones que dieron pauta a su elaboración; quiénes se involucraron en su creación; cómo se desarrollaron esos trabajos; cuáles son las características que los distinguen; qué alcances tienen; bajo qué narrativas legales se sustentan; y la forma cómo se han compartido las experiencias de los protocolos del voto trans en la región.

Los protocolos de México, Chile, Colombia y Perú no pueden ser analizados como productos legales que emergen de manera loable por parte de los organismos electorales de estos países, sino como resultado de procesos de lucha y demandas de larga data de las colectivas, organizaciones y personas trans.

2. Metodología

La metodología consta de dos momentos:

Primero, los cuatro protocolos trans fueron analizados de forma comparada considerando la estructura de los cuatro protocolos. Segundo, por ser de interés prioritario de este trabajo recuperar las memorias de lucha de las personas trans en el avance del reconocimiento de derechos político-electorales, así como de aprehender las pedagogías compartidas entre los países que cuentan con protocolos trans, se llevaron a cabo entrevistas (a través de zoom) a personas activistas trans y personas funcionarias de los organismos electorales para ubicar los antecedentes de las acciones colectivas trans que impulsaron e incidieron en la

elaboración y aprobación de los protocolos. Así como conocer su evaluación a estos instrumentos.

Es preciso enfatizar que las entrevistas a personas activistas trans o LGB que incidieron en la creación de los protocolos se hace desde la recuperación de la justicia testimonial.

3. Anclajes cissexistas del modelo de ciudadanía liberal

1.1. El sujeto cartesiano como El ciudadano

La modernidad arrojó al sujeto cartesiano cuyas características se basan en la razón, éste es capaz de ejercer la duda metódica sobre lo que se siente y lo que se vive, puede cuestionar y cuestionarse a sí mismo. Es “una cosa que piensa. ¿Y qué es una cosa que piensa? Es una cosa que duda, entiende, concibe, arma, niega, quiere, no quiere, imagina y siente” (Descartes en Castelar, 2012: 33). Empero el sistema requiere para su afirmación de un no-participante, de un no razonante, del insensato.

En esta lógica, la sexualidad será entendida como un conocimiento sobre nosotros mismos, se convertirá en un saber que da forma, clasifica y pone límites y por tanto es un saber que termina por materializarse en los cuerpos y lo mismo ocurrirá con otras categorías como clase, raza, etnia, entre otras (Castelar, 2012: 35). Dirá Castelar (2012), estos mecanismos constituyen por tanto al sujeto dado que marcan los límites de su existencia e imponen las prácticas de su reconocimiento e identificación.

Se construye entonces la matriz de comprensibilidad desde donde se dictará los cuerpos que han de ser inteligibles para el sistema hegemónico moderno que clasifica y caracteriza a los seres humanos. Paul Preciado (citado en Euskadii, 2013 [YouTube]) menciona que entre los años de 1830 y 1850 aparecen desde la medicina las nociones modernas de deficiencia y discapacidad físicas y psíquicas, entendidas como patologías.

Preciado dirá que los procesos de invención y de producción del sujeto sexual no son independientes del conjunto de procesos que inventan y construyen el cuerpo como normal y patológico (heterosexuales/homosexuales); como pudiera ser desde la concepción de determinados cuerpos en lo capacitado o discapacitado partiendo de la funcionalidad corpórea y orgánica¹.

Para Paul Preciado lo que veremos en el siglo XX como movimientos de revolución somatopolítica fue un enorme proceso de despatologización del cuerpo; es decir, los diversos movimientos van a cuestionar el aparato de verificación de la biopolítica; cuestionan el aparato discursivo de representación que permitía considerar al cuerpo homosexual como un cuerpo patológico.

Estas dimensiones de comprensión que sustentó la ilustración y que con los avances médicos y estadísticos definieron en el siglo XIX el cuerpo nacional sano, permearon todos los aspectos de la vida social y la noción de ciudadanía del modelo liberal no pudo escapar a estos límites de acotación del “cuerpo normal”. El origen de la ciudadanía surge desde las bases que vinculan al sujeto masculino con la propiedad privada y conferido a una cierta edad (Macpherson, 2009). La noción de ciudadanía como entidad paradigmática encontró su encarnación en lo masculino, en la clase media, en la blanquitud como ideal etno-racial; en el capacitismo articulado a una concepción de salud entendida como vigorosidad y productividad a los medios de producción y en la cis-heterosexualidad.

La ciudadanía trajo consigo de manera explícita su espacio de estar y ser, y ese espacio fue el orden cívico público. La territorialidad del cuerpo encarnado del ciudadano fue extendida al espacio público, el derecho a habitarlo estaba supeditado a los rasgos del sujeto cartesiano. Ese espacio se articuló a partir de reglas, en un orden legal liberal-racional.

¹ “El homosexual, en cambio, es una categoría que se construirá en el marco del discurso de la sexualidad, ya en el siglo XIX, bajo la dirección especialmente del saber médico como ciencia. No sólo los médicos escribirán la etiología y la terapéutica, sino que definirán sus cuerpos. La homosexualidad resulta así mucho más que una perturbación psíquica o endocrina, es un tipo especial de persona con una mente y un cuerpo particular. Ya no es el sodomita que comete un delito, sino que se construye una categoría «étnica» para intentar abarcar el homoerotismo” (Figari, 2012: 66-67).

El orden cívico público como lo menciona Iris Young (1998) descansará en una oposición entre dimensiones pública y privada de la vida humana. Que estarán en correspondencia entre razón por un lado; cuerpo, afectividad y deseo, por otro. Por eso la “concepción emancipatoria de la vida pública puede asegurar mejor la inclusión de todas las personas y grupos, no con la pretensión de una universalidad unificada, sino promoviendo explícitamente la heterogeneidad en lo público” (Young, 1988: 446).

La dimensión pública será el espacio del esplendor ciudadano, de aquellos que cumplan con las coordenadas cartesianas en su vida cotidiana y la dimensión privada quedará reservada para lo irracional, para todo aquello que cause vergüenza. Esta división estará fundamentada en la base ética moderna de la imparcialidad, el sello característico de la razón moral. Pero el control de esta oposición se garantiza desde el poder político a través de la biopolítica que ordena y disciplina los cuerpos.

La ciudadanía es entonces un dispositivo político que lima diferencias materiales y deontológicas para alcanzar el grado cero que se instaura desde las condiciones materiales corpóreas de occidente, desde donde se constituyó el paradigma de ciudadanía.

La idea de ciudadanía produjo el reconocimiento corporal de una minoría y excluyó a la mayoría a través de valores y normas depositadas en la ciudadanía occidental. (Wallerstein citado en Enríquez y Martínez, 2016: 2). Así la ciudadanía fue dada a un reducido grupo de personas que cumplían con ciertas características.

La condición ciudadana lleva consigo de manera explícita una serie de derechos que atraviesan a los sujetos individuales en sus constructos civiles, políticos y sociales y para ello existe un marco legal de protección.

1.2. La condición ciudadana de las personas trans

La condición ciudadana también se supeditó al mandato cissexista del sujeto cartesiano: la inteligibilidad de la población a través de la narrativa política binaria de ser hombre o mujer

y de constreñir el género a los genitales, como otro producto más de la biopolítica. El pene y la vulva se generizaron, el macho será hombre y la hembra será mujer. Se constituye así un género vinculado a los genitales, resultará impensable otras formas posibles de vivir el cuerpo y la identidad de género que no sean a partir de esos constreñimientos materiales corpóreos; y la posibilidad de no vivirse ni como hombre ni como mujer es todavía mucho menos imaginable.

Poco se discute sobre el régimen cissexista, ése que establece cuerpos verdaderos de hombres y mujeres a partir de poseer un pene o una vulva (Radi, 2020). Los cuerpos que cumplen con este mandato serán leídos desde lo normal y lo natural, así su condición cisgénero será el pase de certeza a las garantías de la legalidad democrática y en consecuencia a su ser y estar cotidiano desde el resguardo del Estado.

Lo trans pone de manifiesto las limitaciones de la “perspectiva de género”, cuya “absoluta dependencia ontológica respecto de la diferencia sexual produce un inmediato y persistente efecto óptico: dicha perspectiva sólo «ve» mujeres y hombres” cis (Cabral citado en Radi, 2020: 24).

El orden cissexista nos narra un disciplinamiento del cuerpo a partir de la comprensión binaria que asegura quiénes son y pueden ser hombres y quiénes son y pueden ser mujeres sin considerar nunca la vivencia personal del cuerpo y la autonomía del sujeto de su autopercepción para alcanzar el libre desarrollo a la personalidad.

Bauer et al. propusieron el concepto de “cisnormatividad” para describir la expectativa de que todas las personas son cis, que las personas asignadas al nacer como hombres siempre se convierten en hombres y las personas asignadas al nacer como mujeres siempre se convierten en mujeres (Bauer et al., citado en Radi, 2020: 26, [traducción de Radi]).

La cisnormatividad delinea las prácticas e instituciones sociales, así la presencia de personas trans* es vivida como un suceso inesperado, algo inusual que trastoca lo normal, lo esperado,

dirá Blas Radi, y por lo mismo se resuelve por medio de “dos estrategias alternativas igualmente problemáticas: 1 se les excluye para mantener intacta la norma, o bien, 2 se les incluye sin hacer ajustes necesarios, por ejemplo manteniendo la matriz cisnormativa y encajando a las personas trans por la fuerza”. (Radi, 2020: 27).

El diseño epistémico del espacio público, a partir de lagunas hermenéuticas, ha generado históricamente la exclusión de muchas poblaciones, entre ellas la de las personas trans. En este sentido si se desea gozar de los derechos ciudadanos hay que cumplir con la cisnorma, de lo contrario los cuerpos y las trayectorias de vida trans son arrojadas a los bordes del espacio público y en consecuencia a la vida indigna. Las personas trans históricamente no han tenido reconocimiento a sus derechos. En suma, no son consideradas personas ciudadanas. La imposibilidad de rectificar sus documentos de identidad, producto de un marco legal cissexista les impone estar desde la invisibilidad, desde la incomprensión jurídica que les niega la existencia el aseguramiento de sus vidas.

Todas las personas sustentamos nuestra existencia legal a partir del derecho fundamental a la identidad legal y éste resulta ser la base para ejercer nuestros demás derechos. La identidad incluye cinco rasgos inamovibles: el nombre, el apellido, la fecha nacimiento, el sexo/género y la nacionalidad. Esta información bajo la cual nos reconoce el Estado pasó antes por la mirada médica quien a partir de nuestros genitales gritará nuestro sexo y de ahí se detona el resto de la información esencial para ser personas con derechos. Dicha comprensión médica se conduce desde los marcos cissexistas que apuntalan a la legalidad bajo la cual se produce el orden social.

Las personas trans además, tienen cancelados los derechos civiles y políticos que dan soporte a la democracia liberal. Para ellas no existe, entre muchas otras cosas, el derecho a votar a partir desde quien se es; imposible que sean votadas y que puedan conformar una representación política en los Congresos y en los cargos de toma de decisiones.

2. Instrumentos internacionales que garantizan y protegen los derechos de las personas trans.

Pese a todo la abyección hacia las personas trans, ésta no ha podido contener su acción colectiva, que junto con otras poblaciones han emprendido lo que Preciado llama las revoluciones somatopolíticas desde los años sesenta del siglo XX. Carlos Figari (2010) señala que las primeras organizaciones de las personas disidentes a la heteronorma y cisnorma en Argentina sucedieron desde 1967. Posterior a eso destacan los disturbios de Stonewall en Nueva York que marcaron la indignación de las personas no hetero ni cisnormadas y dieron pauta a la movilización organizada de su resistencia y lucha en América Latina y el Caribe.

Los años setenta serían el inicio de acciones colectivas por la vida digna de las personas trans y no heterosexuales que traerían aparejado la denuncia de un orden político autoritario excluyente de ciertos cuerpos y trayectorias de vida que paradójicamente no atendieron tampoco las transiciones a la democracia. Dichas transiciones políticas hacia la democracia recuperaron los términos y condiciones del ciudadano a partir del sujeto cartesiano.

No obstante, los años 90' del siglo XX fueron cruciales en la construcción de la legitimación de los derechos humanos como indicadores inapelables para medir a las democracias. Muchas poblaciones marginalizadas históricamente encontraron en esa gramática legal su zona de refugio para defenderse de las discriminaciones y violencias sistemáticas.

Los derechos humanos de las personas trans tienen sus inicios en la Declaración Internacional de los Derechos de Género, aprobada el 28 de agosto de 1993 en la Segunda Conferencia Internacional sobre Legislación de Transgeneridad y Política de Empleo en Houston, Texas. Esta Declaración consideraba el derecho de las personas a reivindicar la identidad de género, el derecho a la libre expresión de la identidad y del papel de género, el derecho a determinar y modificar el propio cuerpo y el derecho a un servicio médico competente y profesional (Coyotzin, 2019: 15-16).

En noviembre de 2006 se formularon y adoptaron los Principios de Yogyakarta en los cuales se hicieron explícitos criterios orientadores en materia de derechos humanos contraídos por

los Estados en relación con la orientación sexual y la identidad de género, con base en los tratados y las leyes de derechos humanos existentes hasta el momento, y en ellos se hizo explícito los derechos político-electorales de las personas trans.

Más tarde, en 2011 la Asamblea General de las Naciones Unidas dictó la resolución “Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género”, en donde se reafirmaron los principios de dignidad, igualdad y no discriminación con base en un estudio que la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUDH, realizó sobre las leyes y prácticas discriminatorias y sobre los actos de violencia en contra de las personas con base en su orientación sexual o identidad de género en todas las regiones del mundo.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en 2014 elaboró las Directrices sobre Protección Internacional: Solicitudes de la condición de refugiado relacionadas con la orientación sexual y/o la identidad de género en el contexto del artículo 1A(2) de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y/o su protocolo de 1967. Así la ACNUR promovió la protección de todas las personas LGBT solicitantes de la condición de refugiados y aquellos que reciben otras formas de protección complementaria (ACNUR, 2014).

El 24 de noviembre de 2017 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Opinión Consultiva OC-24/17 solicitada por la República de Costa Rica sobre la identidad de género, e Igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. Esta Opinión contempla el derecho a la igualdad y a la no discriminación de personas LGBTI; el derecho a la identidad de género y los procedimientos de cambio de nombre. Asimismo contempla la protección internacional de los vínculos de parejas del mismo sexo (CIDH, 2017).

3. Avances en materia de derechos de las personas trans en América Latina y el Caribe

El marco normativo internacional de derechos humanos que ha empezado a proteger a las personas trans desde la década de los noventa del siglo XX ha encontrado al paso de los años

su materialización en los Estados-nación de la región que se encuentran adheridos a los Tratados y Convenciones Internacionales de derechos humanos. El reconocimiento de derechos de las personas trans ha sido lento, ha tomado sus pausas, le ha faltado contemplar las más de las veces el piso mínimo de derechos para construir una vida.

De 2002 a la fecha, América Latina y el Caribe han reconocido 24 derechos exclusivamente para personas trans, entre estos se encuentran:

Tabla 1. Reconocimiento de derechos para personas trans a nivel nacional en América Latina y el Caribe

País	Derecho	Año en que se reconoce	Mecanismo de aprobación
Argentina	Identidad de género	2012	Legislativo
Argentina	Derechos político-electorales (ejercicio del voto para personas trans)	2012	Legislativo
Argentina	Trabajo (derecho a la no discriminación laboral)	2021	Legislativo
Argentina	Identidad de género (se reconoce la identidad de género no binaria)	2021	Ejecutivo
Bolivia	Identidad de género	2016	Legislativo
Bolivia	Unión civil	2017	Judicial
Brasil	Uso de nombre social para los contribuyentes	2017	Ejecutivo
Brasil	Identidad de género	2018	Judicial
Chile	Identidad de género	2018	Legislativo

Chile	Derechos político-electorales (ejercicio del voto para personas trans)	2020	Organismo Público Autónomo
Colombia	Identidad de género	2015	Ejecutivo
Colombia	Derechos político-electorales (ejercicio del voto para personas trans)	2020	Organismo Público Autónomo
Colombia	Pensión de vejez	2021	Pensión de vejez
Costa Rica	Seguridad social (salud)	2018	Ejecutivo
Cuba	Seguridad social (salud: cirugía de reasignación de sexo)	2007	Ejecutivo
Ecuador	Derechos político-electorales (ejercicio del voto para personas trans)	2016	Ejecutivo
Ecuador	Identidad de género	2016	Legislativo
México	Derechos político-electorales (ejercicio del voto para personas trans)	2017	Organismo Público Autónomo
México	Identidad de género (aplica sólo para personas trans mexicanas de cualquier edad, que vivan en el extranjero)	2022	Ejecutivo
Panamá	Identidad de género	2006	Ejecutivo
Perú	Identidad de género	2016	Judicial
Perú	Derechos político-electorales (ejercicio del voto para personas trans)	2021	Organismo Público Autónomo
Uruguay	Identidad de género	2009	Legislativo
Uruguay	Derecho a la vida (una vida plena)	2018	Legislativo

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de datos Reconocimiento de derechos LGBTIQ+ del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina (2021).

El reconocimiento de derechos exclusivos para las personas trans en la región empezó en Uruguay en el año 2009; es decir, hace apenas 13 años. Tan solo 12 países de América Latina y el Caribe han reconocido por diferentes vías este tipo de derechos a favor de las personas trans, siendo Colombia el país que más derechos ha reconocido, tres.

Para fines de este trabajo se destacan los derechos político-electorales que se han conseguido en América Latina y el Caribe. Al respecto se puede decir que son Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú los países que han reconocido el derecho al voto de las personas trans y en el caso de México no solo eso, sino también acciones afirmativas que inciden directamente en el registro de candidaturas para partidos políticos y candidaturas independientes a favor de las poblaciones de la diversidad sexual².

Las herramientas legales que se han generado en estos países para asegurar el voto de las personas trans han sido distintas. Argentina tras reconocer en 2012 la identidad de género se enfrentó al reto de la actualización de documentación de las personas trans. En 2013 se llevó a cabo una campaña para agilizar y facilitar la actualización de los datos de las personas trans en el padrón electoral. En este sentido, la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) llevaron a cabo esta campaña y trabajaron en conjunto con la Secretaría Nacional Electoral. Pero, no todas las personas realizaron la actualización ni fueron a votar.

² Es importante señalar que las acciones afirmativas aprobadas el 15 de enero de 2021 por el Instituto Nacional Electoral mediante el acuerdo INE/CG18/2021, tras un mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) “derivan de movilizaciones colectivas locales de larga duración en el tiempo, por parte de las poblaciones históricamente excluidas del debate sobre la participación en la construcción de la democracia, como las poblaciones indígenas, LGBT y no binarias, las poblaciones con discapacidad y las afromexicanas que demandan su incorporación a la condición ciudadana real, el acceso a cargos de representación popular y a cargos públicos sin que esto implique vulneración al principio constitucional de la paridad de género” (Garza y López, 2021).

En Ecuador, el reconocimiento del derecho al voto fue impulsado por las propias personas y activistas trans que eran víctimas de discriminación por parte de la ciudadanía, policías y miembros de mesa; también porque eran acusadas de falsificar la cédula ya que en ésta se constaba el género en vez de sexo. Durante el 2016 se lanzó la campaña "Acuerdo por la Igualdad Ecuador", que fue impulsada por la Federación Nacional de Organizaciones LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex), con el objetivo de incentivar el voto por una sociedad más inclusiva e igualitaria y donde tuvieron el apoyo del Registro Civil para la actualización de sus DNI, y en atención de lo dispuesto en la Ley de Gestión de Identidad.

En tanto en México, Chile, Colombia y Perú se han diseñado y aprobado protocolos para garantizar el voto de las personas trans. De estos cuatro países solo México no cuenta con ley de identidad de género a nivel nacional. Dichos protocolos han marcado una ruta de avance en los derechos político-electorales de las personas trans.

4. Los contextos de surgimiento de los Protocolos para el Voto Trans: luchas y resistencias.

A finales de 2017 México es el primer país de la región en elaborar y aprobar un protocolo para garantizar el voto de las personas trans, tres años después lo hicieron Chile y Colombia y un año más tarde Perú, hasta ahora son cuatro países quienes cuentan con este instrumento legal para generar las condiciones que hagan posible el voto de las personas trans y no binarias que tengan o no la rectificación legal de sus documentos.

4.1. México

La iniciativa del protocolo

Al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) le llega el representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) un oficio donde le solicita al INE aplicar medidas de nivelación a favor de las personas trans como las que ya existían en la Ciudad de México. El INE aprueba la solicitud para el proceso de elección de 2018 y establece que a

partir de junio de 2017 se empezaría a trabajar, para ello contrataron a una asesora externa, María Teresa González Luna, y como asesora interna, sin pago extra, se asigna a Luisa Rebeca Garza López, mujer trans quien en ese entonces era Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local del estado de Oaxaca.

La metodología de las sesiones de trabajo

Rebeca Garza pide trabajar bajo las siguientes condiciones: 1. Levantamiento de minuta de las sesiones de trabajo. 2. Involucrar a un grupo extenso de personas trans y no binarias, de todo el país; a lo que el INE accedió.

Tras la identificación de las personas que podían trabajar se organizan dos mesas de trabajo en las oficinas centrales del INE.

La coordinación de ambas mesas de trabajo y la atención de las observaciones que iban surgiendo recayó sobre Rebeca Garza. Ella construyó una propuesta de protocolo que incluía además el 1% de cupo laboral trans y distribución de tiempos de radio y televisión para difusión del protocolo.

Lo político de las sesiones de trabajo

El reunir a representantes de diversos movimientos trans generó sesiones de trabajo ríspidas. Las sesiones de trabajo estuvieron marcadas por tensiones internas de los movimientos trans.

Las consejeras que acudieron normalmente a las sesiones fueron Dania Ravel y a veces Adriana Favela, Claudia Zavala y Pamela San Martín. En el caso de los consejeros hombres, incluyendo al consejero presidente Lorenzo Córdova, siempre mandaban a sus asesores, de igual manera ocurría con las direcciones.

Dania Ravel en la Conferencia Magistral: "Inclusión y democracia: la garantía de los derechos de las personas trans" (citada en Comunicación Social IEEQ, 2022 [YouTube])

señala que el protocolo pasó para la Comisión de Igualdad de Género y no Discriminación que ella en ese momento presidía y cuando se tuvo que hacer la aprobación la dejaron sin *quórum*, por lo que tuvo que suspender la sesión y llamar a otra al día siguiente, no asistieron todas las personas integrantes, pero ya hubo *quórum*,

hubo unos colegas que me decían: Dania retira el punto, no te hagas esto, todos te van a votar en contra, y yo dije yo creo en este tema y voy a dar la lucha hasta donde se pueda y visibilizarlo (*idem*).

Esa propuesta de protocolo pasó con el único voto de la consejera Ravel y se remitió a las Comisiones Unidas de Organización y de Capacitación Electoral, esas comisiones eran quienes tenían que subir el tema al Consejo General.

En el marco de la discusión de las Comisiones Unidas, la consejera Ravel comenta que

hubo un colega que dijo que si nosotros permitíamos eso era como permitir que payasos, que luchadores con máscara o mujeres con burka votaran para el día de la jornada electoral. Entonces una representación del PRD inmediatamente dijo: ¿está usted comparando a las personas trans con payasos, acaso? (*idem*).

Y eso derivó, en palabras de Dania Ravel, a que se llevaran procedimientos de oficio tanto en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), como en el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (COPRED) y eso hizo que se generara más presión para que se pudiera aprobar el protocolo.

Desde el testimonio de Rebeca Garza (entrevista personal, 18 de abril de 2022), al ser una reunión de comisión solo podían estar las y los consejeros, y los representantes de los partidos políticos. Pero tras la negativa de aprobar el protocolo por parte de los consejeros hombres, Rebeca Garza recibió una llamada de la consejera Dania Ravel para que se presentara a defender la propuesta desde los marcos de comprensión y la vivencia de mujer trans. Ella se presenta y los consejeros Marco Baños, Ciro Murayama, Jaime Rivera y el representante del

Partido Verde Ecologista le dicen que “nosotros, que quede claro queremos respetar el derecho de las personas trans, pero no podemos vulnerar el principio de legalidad, el principio de legalidad es muy importante en la Constitución, el INE ha adquirido la confianza ciudadana...” (*idem*).

Rebeca Garza López pide la palabra como funcionaria, como mujer trans y como vocal, y desde ahí les dice:

no olviden todos los candados que existen, y no se están desmontando, para que una persona trans o una persona que no sea trans diga ‘yo soy trans’, y no es trans, y se quiera beneficiar para votar de más en su supuesto caso, la persona tiene que ir a la casilla y hacer fila y enfrente de toda la fila tiene que decir ‘yo soy trans’, y a las personas trans nos cuesta la vida decir eso; y todavía de que haga eso bajo el supuesto de que quiere votar de más la credencial de esa persona, sea o no sea (trans) se la van a perforar, ya no la va a poder usar; su pulgar derecho o el izquierdo se lo van a pintar con tinta indeleble, por lo tanto él ya no lo va a poder usar ni votar; si van a lista nominal donde corresponde esa credencial le van a poner el sello de voto, entonces díganme en dónde está el riesgo, cuando lo que sí sucede es que las personas trans no vamos a votar (Garza López, entrevista personal, 18 de abril de 2022).

Y la respuesta fue entonces cómo vamos a capacitar al funcionariado para que identifique quién es trans y quién no es. Y la respuesta de Rebeca Garza fue: No, si la persona dice que es trans es trans, entonces se le aplica el protocolo. A lo que argumentaron, pero cómo le vamos a llamar, la respuesta fue: le llamas por sus apellidos.

La lucha por la aprobación

Cuando hicieron una siguiente reunión para aprobar el protocolo lo votaron en contra. Le quitaron todo lo que le había puesto Rebeca Garza en conjunto con el grupo de personas que lo trabajó y lo que agregaron fue que el presidente de casilla tendría la obligación de verificar la identidad de la persona trans.

Esa sesión se transmitió solo por audio, Rebeca grabó la sesión. Se vota en contra y el consejero Rivera dice que con ese protocolo cualquier persona enmascarada va a poder votar. Dan otra prórroga y en ese período de tiempo las organizaciones demandan al INE ante CONAPRED, usan como testimonio el audio de la sesión, y en 24 horas le llega al INE una medida cautelar (en octubre volvieron a dar prórroga y se fueron hasta noviembre-diciembre de 2017). Era diciembre, ya había empezado el proceso y el protocolo trans no salía.

Rebeca Garza envía una carta al consejero presidente Lorenzo Córdova por Oficialía de Partes y en esa carta narra cómo los consejeros no estuvieron en las sesiones y que una vez que estaba el documento hecho por muchas manos, estos querían cambiar hasta el nombre, cuando ni siquiera sabían por qué usaban determinadas palabras; que era una falta de respeto porque habían participado personas que iban a las sesiones con sus propios recursos. Rebeca Garza en esa carta decía que ella se hacía a un lado. En ese momento el INE ya estaba acusado de transfóbico y había medidas cautelares para éste.

En diciembre de 2017 se aprueba el protocolo trans y el texto de carteles y folletos pasa por la revisión de Rebeca Garza; los textos que hoy se pueden ver en dichos productos guardan la corrección que ella les hizo en su momento.

4.2. Colombia

Antecedentes

En 2018 Marlon Pabón Coordinador de Administración Pública y Transparencia de Misión de Observación Electoral (MOE), (entrevista personal, 4 de abril de 2022), es invitado a México por el INE a observar las elecciones, recibe las diversas capacitaciones que el órgano electoral imparte y en esos adiestramientos electorales conoce el protocolo del voto trans de México, lo que llama su atención e imagina en la posibilidad de hacer algo así para Colombia. Es hasta 2020, cuando Marlon Pabón lo plantea en la MOE, ahí encuentra una respuesta positiva.

La conformación del equipo de trabajo

La primera tarea consistió en involucrar a organizaciones que trabajaran esos temas, para ello Marlon Pabón identifica a Caribe Afirmativo, organización que tiene un Observatorio sobre los derechos políticos de las personas LGBT y ubica el dato de que el Grupo de Acción & Apoyo a Personas Trans (GAAT) en 2016, para el plebiscito por la Paz de Colombia, había hecho un ejercicio para identificar las barreras que tenían las personas trans en el ejercicio al voto y lo habían hecho a través de la oficina regional Bogotá de la MOE.

Estrategia de trabajo

Para ese momento la exconsejera del INE Pamela San Martín termina su período como consejera y empieza a hacer consultoría en la MOE, lo que le permite a Marlon Pabón establecer diálogos con ella y es ahí cuando le comparte cómo fue el proceso del protocolo trans en México. Pamela San Martín les ayuda a pensar en la estrategia de incidencia para lograr un impacto positivo y le hace saber a Marlon Pabón la importancia de contactar a Rebeca Garza para que desde su vivencia como funcionaria electoral y mujer trans, le compartiera la experiencia del proceso de aprobación del protocolo trans en México.

Cuando terminan el borrador, hacen una presentación con organizaciones internacionales con la finalidad de hacer un *lobby* que sirviera de presión para la aprobación del protocolo.

Aprobación del protocolo Trans

De junio a septiembre 2020 se desarrollaron los trabajos de elaboración del protocolo hasta su aprobación. El 10 septiembre lo presentaron al Consejo Nacional Electoral, (CNE), con la presencia de Cooperación Internacional, Organizaciones Colombianas, MOE, Caribe Afirmativo, el Instituto Holandés, CAPEL, la embajada de Suecia, El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre otras más. La asistencia de la comunidad

internacional produjo que el CNE no se negara a aceptar el protocolo. Y la sorpresa fue que se aprobó de manera idéntica.

La presentación del protocolo

En diciembre por iniciativa de MOE, GAAT y Caribe Afirmativo organizan el lanzamiento del protocolo con la finalidad de impactar a la región. Para dicho evento invitaron a Amaranta Regalado (México), Franco Fuica (Chile), Marcela Romero, a la embajadora de Suecia, a Laura Weinstein, y al Relator Especial Víctor Madrigal. Comenta Marlon que fue en ese momento cuando piensan en la necesidad de hacer algo regional (la propuesta de Protocolo Trans para América Latina y el Caribe) y después de eso convocan a la primera reunión en enero de 2021.

En 2021 Narda Carranza, investigadora de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), se acerca a MOE para que les ayuden a evaluar la propuesta de protocolo trans que habían elaborado.

4.3. Chile

Antecedentes

Chile aprobó la ley de identidad de género a nivel nacional desde el 2018, cabe señalar que el trámite de rectificación de documentos demora 45 días hábiles. Para marzo de 2020 se tenía establecido un Plebiscito, entonces la gente que empezó a rectificar su nombre y sexo tendría el trámite hasta finales de febrero, pero el padrón electoral, para dar certeza jurídica de quién tenía derecho al voto, se cierra 90 días antes. De tal suerte que, esas personas no lograrían tener sus datos actualizados en el padrón electoral.

Ante esa situación Franco Fuica, entonces Coordinador de la unidad de legislación y políticas públicas de Organizando Trans Diversidades, OTD Chile (entrevista personal, 10 de junio de 2022) y Matías Val Cortes Asesor jurídico esa misma Organización fueron a conversar con

gente del Servicio Electoral de Chile, Servel, y ellos les dijeron que había un contexto legal que daba certeza jurídica a toda la elección y en ese sentido no se podía alterar nada.

El 18 de marzo de 2020 se declara la pandemia en Chile y el Plebiscito tuvo que ser cambiado para el 25 octubre de ese mismo año. Franco Fuica comenta que esto permitió que las 2,200 personas que habían cambiado su nombre y su sexo en el período entre los últimos días de diciembre y los últimos días de julio se inscribieran en el registro electoral.

Pero 200 personas que en el lapso del 25 de julio al 25 de octubre hicieron el cambio de nombre y sexo tenían el problema de no haber alcanzado la actualización en el padrón electoral de sus datos. Entonces OTD, específicamente Franco Fuica, volvió a insistir, pero no tuvieron respuesta.

Franco Fuica dice que un funcionario de Servel, Patricio Santa María, se puso en contacto con Fundación Iguales para ver el tema trans. OTD no había tenido contacto con este funcionario, sino con otra persona, porque a principios de año Santa María se encontraba con licencia y cuando vuelve busca a Fundación Iguales. Pero como esta Fundación no tenían experiencia en temas trans, Servel llamó a OTD.

OTD le hace saber a este funcionario de Servel que su preocupación estriba en que la Ley de identidad de género establece el principio de la confidencialidad; es decir, “yo hago mi cambio de nombre y sexo y no tengo que verme expuesto a que alguien más sepa que hice mi cambio de nombre y sexo” (*idem*). Pero en este proceso del Plebiscito “cuando el nombre que aparece en mi cédula no coincide con el padrón electoral, voy a tener que exponerme y demostrar que yo soy la persona que está en el padrón electoral” (*idem*).

Nosotros en Chile tenemos el run (un número único nacional), comenta Fuica, y ese número no cambia desde que naces hasta que te mueres, aunque haya un cambio de nombre o de apellido ese run es el mismo. Por lo que OTD propone a Servel que el run podía ser entonces una vía para que la persona demostrara que sí es esa persona. Pero como las personas de las mesas de votación surgen de la propia ciudadanía, ésta no estaría capacitada para saber darle

acceso al voto a las personas trans; por lo que la segunda propuesta de OTD es capacitar o dar un instructivo a las personas funcionarias de las mesas de votación.

Servel respondió que el tiempo ya no daba para hacer eso, comenta Franco Fuica que esa respuesta era inadmisibile porque OTD venía solicitando esa atención desde marzo.

La elaboración del protocolo

Servel respondió que lo que podían hacer era un protocolo. Servel elabora un protocolo y lo envía a OTD, esta Organización le hace varias modificaciones, pero la versión final fue una mezcla entre la propuesta de Servel y de OTD, lo que no da como resultado un óptimo protocolo.

Franco Fuica señala que le dijeron a Servel que se necesitaba subir al sitio web, o a su twitter, o a Instagram alguna imagen o algún dibujo que explicara claramente que cuando le tocara votar a una persona trans, solamente debían fijarse que el run fuera el correcto. La respuesta que recibieron fue que necesitaban de un presupuesto para hacer una licitación y contratar a un diseñador, dice Fuica,

esa gente tiene diseñadores de tiempo completo, de hecho, nos dijeron si ustedes pueden hacerlo, y lo pueden subir a sus redes. Claro nosotros lo íbamos a hacer, pero no iba a tener la misma fuerza cuando una persona que no entiende del tema ve un documento que dice OTD y dice qué es OTD, no me importa, distinto es cuando ven que dice Servel ahí (*idem*).

El protocolo fue publicado en Chile cuatro días antes del plebiscito.

Fuica menciona que no tuvieron ningún acercamiento con México ni con Colombia, países que en ese momento ya contaban con protocolos del voto trans.

La logística de la aplicación del protocolo

“Muchas personas de OTD nos fuimos a ofrecer de vocales o de apoderados de mesa o de local, lo cual nos permitía estar vigilando que si esto sucedía poder actuar rápidamente” (Franco Fuica). Nunca hubo una presentación oficial del protocolo.

OTD estuvo en varias de las mesas de votación y pusieron a disposición el número de celular de la Organización por si alguna persona que tuviera problemas para votar se pudiera comunicar con OTD y ellos trataran de arreglar la situación.

Franco Fuica afirma que no hubo ninguna llamada de la ciudadanía trans o de Servel donde les hayan dicho que tuvieron que aplicar el protocolo.

4.4. Perú

Antecedentes

En 2016 una mujer trans que estaba recibiendo capacitación para ser miembro de mesa denuncia ante organizaciones trans que una persona durante dicho adiestramiento había preguntado si podía anular los votos de las personas que su imagen no coincidiera con su DNI y le respondieron que sí podía hacerlo. Eso lo identificó la mujer trans como una amenaza al voto de las personas trans. Este suceso generó un diálogo entre las colectivas y organizaciones como fueron No tengo miedo, Diversidades Transmasculinas y Fémimas, lo que les llevó a contactar a IDEA Internacional y concretar un proyecto para hacer observación del voto de las personas trans. Tuvieron acercamientos con la ONPE pero ya era tarde, pues el proceso de capacitación ya se estaba llevando a cabo dado que las elecciones estaban a una semana de ocurrir.

La logística de la observación del día de los comicios consistió en llamar a personas trans voluntarias, que tenían que estar haciendo llamadas a las personas trans para que les dieran cuenta de sus testimonios al momento de votar. Santiago Balvín (entrevista personal, 25 de abril de 2022), integrante de Diversidades Transmasculinas en ese momento y ahora de Rosa

Rabiosa, comenta que se entrevistaron entre 100 y 133 personas y los testimonios evidenciaron violencia al momento de votar.

Para los comicios municipales de 2018 estas mismas colectivas se acercaron a la ONPE para ver si podían concretizar acciones para asegurar el voto de las personas trans. Tampoco se logró nada y las colectivas volvieron a hacer por su cuenta observación electoral.

Tras esos resultados se acercaron por tercera vez a la ONPE, y hablaron con Pilar Biggio Pastor, quien era Gerente de la Gerencia de Información y Educación Electoral, y ella les comentó que había planes para desarrollar un protocolo para el voto de las personas trans. Para ese momento las colectivas ya tenían demandas más complejas.

La convocatoria para elaborar el protocolo trans

Narda Carrasco de la Gerencia de Investigación y Aprobación Electoral de ONPE (entrevista personal, 7 de abril de 2022) comenta que IDEA Internacional aportó un especialista que ayudó a delinear y elaborar los contenidos del protocolo (entre septiembre y octubre de 2020). En 2021 se emprendió el proceso de validación con otros actores de la sociedad civil, dándoles mayor importancia a organizaciones que representan intereses de la ciudadanía LGBT.

El protocolo es aprobado en marzo de 2021 con miras a ser implementado en las elecciones de ese mismo año. No obstante, su aprobación se realiza muy cerca de la fecha de la jornada electoral, lo que no daba tiempo para preparar e implementar el protocolo. La cara más visible del protocolo fue el afiche (cartel) “Aquí votamos todos”.

Balvín manifiesta que el protocolo no tuvo un lanzamiento oficial, que se les dijo iban a poner los afiches en los puestos de votación para que se respetara el voto de las personas trans, pero que estos no fueron lo suficientemente grandes ni visibles y tampoco hubo una difusión.

Las acciones después de la implementación del protocolo

Narda Carrasco fue contratada por la ONPE para dar seguimiento al protocolo. En esta encomienda la investigadora hace uso de los directorios LGBT que tenía la ONPE y empieza a contactar a las personas trans para realizarles entrevistas y conocer más acerca de cómo funcionó el protocolo.

En palabras de Narda Carrasco los resultados que arrojó el informe producto de las entrevistas marcó que: el protocolo solo ve como votantes a las personas trans, cuando deben verse como personas que pueden asumir cualquier otro rol el día de la jornada electoral; las personas trans valoraron mucho el criterio que estaba contemplado con relación a que no se lea su nombre como aparece en el DNI y solo se digan sus apellidos; la mayoría de las personas trans sabían del protocolo, pero no lo habían leído; tenían una confusión entre queja y denuncia y muchas personas por esa razón no habían puesto su queja; asimismo, se recuperaron testimonios de personas que fueron maltratadas y vulneradas en diferentes puntos del proceso del voto (en la entrada o en la mesa de votación), pero dado lo mal que las hicieron sentir, ellas fueron incapaces de poner una queja ante la persona coordinadora del local de votación.

Considerando estos y otros aspectos la tarea de Narda Carrasco fue dar recomendaciones de cómo debería mejorar el protocolo y para ello también fue crucial explorar cómo se venía haciendo en otros países, para ello acudió a países experimentados como México y Colombia.

De Colombia les llamaba la atención su proceso de diseño, señala Carrasco:

El caso colombiano tiene una experiencia muy participativa, un liderazgo de organizaciones que convocan, hay una estrategia comunicacional en el que estas organizaciones de la sociedad civil también tienen un rol más importante y eso sirve mucho para pensar en propuestas.

Asimismo, Narda Carrasco comenta que a partir de la experiencia mexicana Perú está pensando en un protocolo trans para personal de la ONPE y esto no es más que transferencia de políticas en la región.

En esas trayectorias de acercamientos se reúne con la MOE Colombia (con Marlon Pabón) y con la consultora mexicana la exconsejera Pamela San Martín, que también estaba en MOE, y le recomiendan hablar con Rebeca Garza,

Rebeca me ofrece una mirada más amplia sobre qué es lo que podría mejorar... Y lo que criticaba Rebeca me ha servido mucho, incluso para mi *speech* de cuando he tenido que defender ciertos temas, eso es fundamental y ella tenía una posición radical. La idea del protocolo laboral trans interno es gracias a las reflexiones con Rebeca (*idem*).

Los contextos que dan origen a los cuatro protocolos del voto trans que existen en la región responden a las lagunas epistémicas legales, sociales, político-electorales y morales para comprender trayectorias de vida y cuerpos diversos que se alejan del eje binario-cissexista. Cada contexto nacional posee sus propias tensiones particulares. Pero también se identifica de manera contundente experiencias compartidas que se convierten en pedagogías regionales de referencia para delinear el diseño de un protocolo más acabado y conseguir su aprobación por los organismos electorales.

4.5. Los protocolos características y alcance

La aprobación del primer protocolo se da en México en 2017; tres años después se aprueba en Chile y Colombia; y en 2021 en Perú. Cabe señalar que de estos tres países sólo México no cuenta con una ley de identidad trans a nivel nacional (su aprobación ha sido a nivel subnacional). El tipo de reparación que hace cada uno de los protocolos posee matices específicos, las condiciones legales-nacionales de las personas disruptivas al género en cada país producen que las demandas tengan un origen específico y particular de su motivación.

En México el protocolo surge para reparar el vacío legal de una ley que garantice el derecho a la identidad de género. En Chile aunque existe una ley al respecto persiste una demora en la actualización de los datos en el padrón electoral de aquellas personas que han rectificado su acta de nacimiento. El protocolo en Colombia también repara fallas administrativas; la ausencia de una ley de identidad que esté armonizada con la estructura legal. En tanto, el protocolo en Perú repara el derecho incompleto de la ley de identidad de género, ya que para acceder a ésta se debe iniciar un juicio sumarísimo, además de que también presenta ineficiencia administrativa en la actualización del registro electoral.

En México será la solicitud de un partido político ante el INE el inicio de la realización de un protocolo para asegurar el voto de las personas trans. El INE acepta atender la solicitud, pero la encomienda queda a cargo de una de sus funcionarias, Rebeca Garza, quien organizará y coordinará las mesas de trabajo. La experiencia encarnada de Rebeca Garza como mujer trans y experta en temas electorales será el eje de la coordinación de la elaboración del protocolo, pero también la línea de resistencia y lucha a los obstáculos de la institución. Aunque Rebeca Garza es una funcionaria del INE, ella se encuentra atravesada por su trayectoria de vida y lucha trans, lo que la lleva a aprehender la elaboración del protocolo más allá de los marcos de comprensión de una institución electoral que opera desde sesgos cissexistas.

En Chile la promoción del protocolo inició con la demanda de una organización trans, que se enfrentó a las indiferencias del órgano electoral, Servel. Este órgano responde en los límites de los tiempos establecidos para el Plebiscito y cuando el registro al padrón electoral ya se había cerrado. Servel elabora un protocolo, pero no se hace cargo ni de la capacitación, ni de la difusión.

En Colombia el protocolo de voto trans fue impulsado por un colaborador de la MOE, Marlon Pabón, que tras conocer y vivir la experiencia del protocolo trans en México, propone replicarlo en su país de acuerdo con las condiciones del contexto colombiano y para ello, desde el aparato de la MOE, convoca a organizaciones trans para elaborar el protocolo y

presentarlo a la CNE. En el caso de Colombia el órgano electoral no intervino ni en el diseño y ni en la confección del protocolo, solo lo aprobó.

En Perú la iniciativa por asegurar el voto de las personas trans desde tratos dignos empieza con las colectivas y organizaciones trans, son éstas las que inician un trabajo emblemático al realizar observación electoral con sus propios recursos materiales, intelectuales y logísticos, cuatro años antes de que la ONPE elaborara un protocolo, esos esfuerzos incidieron significativamente para que el organismo electoral de ese país se diera a la tarea de diseñar una herramienta normativa, que hasta ahora es la más acabada en la región.

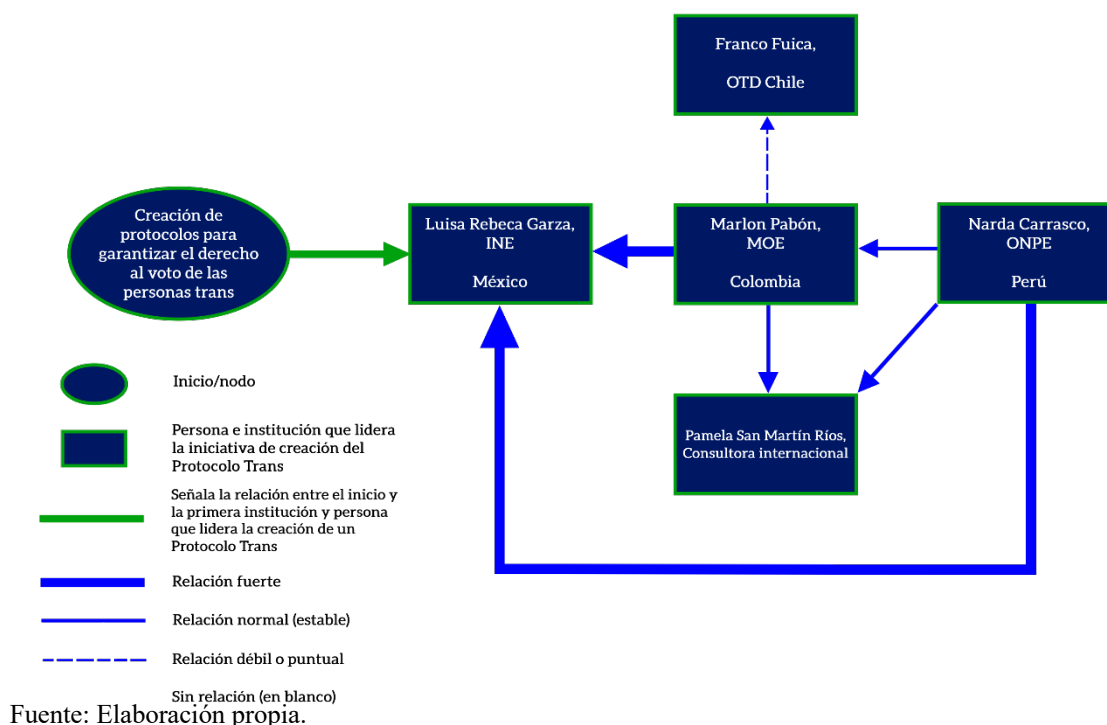
En esta recuperación de los contextos que hicieron emerger los protocolos se hace presente en tres de los cuatro países la expertiz de Rebeca Garza, ella se convierte en un referente para Colombia y Perú en el asesoramiento de los protocolos. Su proceder se ciñó al reconocimiento y trato digno de las personas trans por parte de la institución electoral, lo que le hizo emprender luchas internas dentro del propio INE, no ganó todas las batallas, pero logró con el respaldo de organizaciones, colectivas y activistas trans y el apoyo interno de consejeras sensibles al tema la aprobación del primer protocolo trans de la región.

La forma como Rebeca Garza ha sabido llevar su activismo dentro del sistema electoral la convierte en un referente en la región. Marlon Pabón de MOE Colombia, en su búsqueda para encontrar los elementos necesarios para elaborar el protocolo, se encuentra con los trabajos de Rebeca Garza publicados en línea y desde ahí, él dialoga con ella hasta lograr tener charlas virtuales. En la experiencia colombiana otra figura importante resulta ser la exconsejera Pamela San Martín.

Será hasta el lanzamiento oficial del protocolo Trans en Colombia que Franco Fuica (OTD Chile) se hace presente como panelista en el evento virtual, es invitado como comentarista del Protocolo, pero no establece ningún vínculo con la experiencia colombiana para atender en su país el problema del voto de las personas trans.

En el caso de Perú, Narda Carrasco como investigadora de la ONPE se acerca a la MOE, a través de Marlon Pabón, a Pamela San Martín y al INE, el contacto con este último se hace desde un diálogo entre organismos electorales. Por referencias concretas de Marlon y Pamela, Narda llega a Rebeca Garza.

1. Diagrama de redes de la creación de los Protocolos Trans en América Latina



Los cuatro protocolos comparten en su estructura fundamentaciones legales internacionales y nacionales; marcos conceptuales; y procedimientos de aplicación del protocolo. En lo que difieren es en el reconocimiento de las personas activistas y organizaciones trans que participaron en su elaboración; en el formato y en la de queja. En este sentido, los contenidos de los protocolos de Colombia y Perú son más amplios gracias a los aprendizajes que tuvieron de México en el caso de Colombia y de México y Colombia en el caso de Perú.

Es preciso decir que el colocar una sección de agradecimientos a las colectivas, organizaciones y personas trans; así como de la sociedad civil inicia en Colombia y es que mucho tiene que ver quién o quiénes impulsan el proyecto, lo coordinan y diseñan, como lo

fue en este caso la MOE. Perú inaugura en su protocolo la ruta y el formato de denuncia además de recuperar todos los contenidos antes señalados. Los contenidos que se van agregando en cadena en cada uno de los protocolos remite a las pedagogías aprendidas a partir del compartir experiencias en la región.

Con relación a los momentos que regulan los protocolos de México y Colombia, desde la formalidad, coinciden en atender la jornada electoral, la capacitación y la difusión. Chile solo contempla la jornada electoral y la difusión (aunque en entrevista con Franco Fuica, se pudo saber que en la realidad no hubo difusión del Protocolo). Y Perú la jornada electoral y la capacitación. Importante mencionar que la falta de tiempo para la capacitación es recurrente en los casos de Perú y Chile.

Las instancias que señalan los protocolos que deben impartir las capacitaciones son diferentes en cada caso, en Chile no aplica esta acción. En México se establece que será el organismo electoral con colectivas y organizaciones trans, pero en la práctica las personas trans no se han visto involucradas. El protocolo de Colombia señala que la capacitación la debe impartir la CNE y se recomienda participen organizaciones LGBT, al ser una recomendación tampoco se ha cumplido. Mientras que en Perú se dice que solo la ONPE tiene la facultad de capacitar, aunque ya hay ajustes al respecto.

En cuanto a quiénes deben recibir la capacitación también difiere en cada caso. En México es el funcionariado de organismos electorales quien capacita a las personas funcionarias de casilla; la ciudadanía que integra las mesas de casilla; y observadoras/es electorales. En Chile no aplica esta medida; en Colombia reciben la capacitación funcionariado de organismos electorales; ciudadanía que integra las mesas de casilla en los puestos de votación; observadoras/es electorales y policía y fuerzas armadas. En Perú funcionariado de organismos electorales, ciudadanía que integra las mesas de casilla de los puestos de votación; observadoras/es electorales y policía y fuerzas armadas. En estos dos últimos casos les es apremiante capacitar a la policía y fuerzas armadas porque son quienes vigilan la entrada a los puestos de votación y son quienes cometen más atropellos contra las personas trans.

Reflexiones

El avance de reconocimientos de derechos para las personas trans sustentado en el marco legal internacional en materia de derechos humanos como respuesta a las luchas históricas de colectivas, organizaciones y activistas trans han hecho también posible que las estructuras legales en materia de derechos político-electorales amparadas en un orden cissexista sufran fisuras que posibilitan reconocer el derecho al voto de las personas trans desde la dignidad.

Si bien los cuatro protocolos de voto trans fueron aprobados por los organismos electorales de los cuatro países, esto no implica que hayan sido éstos de manera directa y por iniciativa propia quienes motivaron e impulsaron su elaboración, en un acto de justicia testimonial y recuperación de memoria es preciso puntualizar quiénes estuvieron trabajando en su impulso y creación. Y en esa recuperación aguda y crítica se encontraron continuos de lucha de las poblaciones trans como fue en México, pues la solicitud concreta de un partido político (PRD) en 2017 ante el INE no fue más que la recuperación de la experiencia en el entonces Distrito Federal. Cabe señalar que quien encabezó los trabajos y la defensa sostenida y comprometida del voto de las personas trans fue una funcionaria electoral mujer trans.

En Colombia fue un colaborador de la MOE y aliado LGBT que tras los trabajos compartidos de observación electoral en la región conoce el protocolo trans en México y su sensibilidad por el tema lo lleva a proponer el protocolo, organizar las mesas de trabajo con organizaciones trans y diseñar la estrategia de incidencia para lograr su aprobación. El órgano electoral solo se limitó a aprobar el protocolo.

En tanto el protocolo chileno fue elaborado por el organismo electoral y solo atendió de manera mínima a los conocimientos y saberes de las personas trans, concretamente de OTD. Las denuncias de OTD ante Servel por los retrasos en la actualización de registros en el padrón electoral y los propuestas de cómo podía ser resuelto este problema, llevaron a este organismo electoral a atender las demandas y a emitir un protocolo cuatro días antes del

Plebiscito 2021 en Chile, sin posibilidad de capacitación y difusión. A diferencia de los otros tres países el órgano electoral chileno actuó desde una mucho menor sensibilidad al tema.

La experiencia peruana en cuanto a la elaboración del protocolo trans proviene de los trabajos de observación de voto de las personas trans por parte de colectivas organizaciones trans, dicho ejercicio data desde hace cinco años antes de que la ONPE diseñara y aprobara un protocolo al respecto. Cabe señalar que es la ONPE quien trabaja en la elaboración del protocolo y posteriormente lo somete a una evaluación entre organizaciones y colectivas trans. Perú, aprende y recupera las experiencias de México y Colombia.

Estas cuatro experiencias hacen evidente los trabajos de lucha que las poblaciones trans han hecho en el tiempo, y entre las numerosas demandas que han realizado a los Estados anclados en un orden cissexista está el de votar dignamente pues, aunque tres de los cuatro países de la región cuentan con ley de identidad de género, éstas resultan poco operantes no sólo en ejercicio de los marcos legales-administrativos, sino en el desarrollo de la moral cotidiana. Es un enorme reto para las personas trans ejercer su derecho al voto.

Las jornadas electorales se convierten en momentos definitorios de certeza ciudadana cissexista. La certeza jurídica de la que parte la legitimidad de la democracia electoral se sustenta en un marco de comprensión binaria reducida a los genitales y a expresiones de género estrictamente correspondientes, dicha inteligibilidad de la ciudadanía le lleva a excluir otras formas posibles de vivirse como hombres, mujeres o ninguna de las dos formas. La no correspondencia entre la identificación oficial de las personas y la expresión de género de las mismas al momento de votar, alerta a los sistemas electorales acerca de la usurpación de personalidad que tienen como finalidad el fraude electoral, sin reparar que en la realidad concreta y material existen las personas trans y no binarias que quedan excluidas de esos criterios legales que defienden a la democracia procedimental desde miopías cissexistas. Lo que puede devenir en una forma de discriminación indirecta, cuando una norma o criterio no afecta por igual a toda la población, pero sí a un segmento de ésta por una característica en particular.

Actualmente los sistemas electorales de América Latina y el Caribe enfrentan retos más allá de las lógicas técnicas-electorales, ahora deben tener, entre muchas otras cosas, la capacidad y la sensibilidad de desmontarse de las ideas de que la ciudadanía es universal, homogénea y dividida solo a partir de binarismos cissexistas.

Los organismos electorales de la región no pueden conformarse con la elaboración y aprobación de protocolos trans sin que estos sean permanentemente observados por personas trans y a partir de ahí evaluar su eficacia en aras de corregir lo que sea necesario para que en verdad los protocolos cumplan su cometido y no solo sean una fachada de inclusión.

Los protocolos siguen teniendo deudas con las poblaciones trans, y entre esas deudas están: la implementación de procedimientos para la correcta actualización de los listados de las personas votantes que han tenido rectificaciones de nombre y sexo; difusión de los protocolos de voto trans; la incorporación de las personas trans en la capacitación; la integración de las personas trans en la observación electoral; la elaboración de informes conjuntos de lo observado con personas trans; dar a conocer públicamente esos informes; y contratar a personas trans en los organismos electorales (cupos laborales trans).

Todas estas deudas pendientes deben convertirse en medidas de nivelación que compensen las estructuras epistémicas cissexistas desde las cuales se ha entendido a los sujetos modernos que arrojó la ilustración y desde las cuales se ha organizado el mundo de la vida social incluido el sistema político electoral que da soporte a la democracia.

Referencias bibliográficas

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (2014). *La protección internacional de las personas LGBTI*. México: ACNUR.

Castelar, A. (2012). "Judith Butler y la deconstrucción del sujeto cartesiano". *Rastros Rostros*, 14 (28), pp. 29-42. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6515621> [Consultado 22-04-2022].

- Comunicación Social IEEQ (2022). *Conferencia Magistral: “Inclusión y democracia: la garantía de los derechos de las personas trans*. [YouTube]. 17 de mayo. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=qrgfgPEovX0&t=3182s> [Consultado: 20-06-2022].
- Corte Interamericana de Derechos Humanos (2017). *Opinión Consultiva OC-24/17*.
- Coyotzin Torres, R. (2019). “Derechos humanos de las personas trans: en búsqueda de la identidad y la justicia social”. *Cuadernos de la CODHEM*, (9), pp. 3-27. Disponible en: <https://www.codhem.org.mx/wp-content/uploads/2022/02/personas.pdf> [Consultado 26-04-2022].
- Enríquez, G. y Martínez, C. (2016). “Ciudadanía y cuerpos: reconfigurando la ciudadanía desde la diversidad”. *Sinéctica*, (46), pp. 1-13. Disponible en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1665-109X2016000100006&script=sci_abstract [Consultado 11-04-2022].
- Euskadii. (2013). *Paul Preciado -¿La muerte de la clínica?* [YouTube]. 7 de abril. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=8QdABTYzkeI> [Consultado: 20-04-2022].
- Figari, C. (2010). “El movimiento LGBT en América Latina: institucionalizaciones oblicuas”. En: Massetti, A., Villanueva, E. y Gómez, M. (Comps.). *Movilizaciones, protestas e identidades colectivas en la Argentina del bicentenario*. Buenos Aires: Nueva Trilce, pp. 225-240.
- Figari, C. (2012). “Discursos sobre la sexualidad”. En: Morán Faúndes, J. M. (Coord.). *Sexualidades, desigualdades y derechos. Reflexiones en torno a los derechos sexuales y reproductivos*. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba, pp. 59-83.
- Garza López, L. R. y López Sánchez, E. (2021). “Acciones afirmativas en materia electoral: del regateo de derechos al oportunismo de los partidos políticos”. *Animal Político*. Disponible en <https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/acciones-afirmativas-del-regateo-de-derechos-al-oportunismo-de-los-partidos-politicos/> [Consultado 20-04-2022]
- Mcpherson, C. B. (2009). *La democracia liberal y su época*. Madrid: Alianza Editorial.
- Observatorio de Reformas Políticas en América Latina. (2021). *Reconocimiento de derechos LGBTIQ+*. Ciudad de México: Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJUNAM)

/Washington, D.C, Secretaría de Asuntos Políticos de la Organización de Estados Americanos.

Radi, B. (2020). “Notas (al pie) sobre cisnormatividad y feminismo”. *Ideas*, 11, pp. 23-36.

Disponible en: <https://www.aacademica.org/blas.radi/45> [Consultado 20-04-2022].

Young, I. M. (1998). “La configuración de lo público y lo privado”. En: Del Águila, R., Vallespín, F., et.al. (Eds.). *La democracia en sus textos*. Madrid: Alianza Editorial, pp. 445-469.

Entrevistas realizadas

Santiago Balvín, actualmente integrante de la Colectiva Rosa Rabiosa, 25 de abril de 2022, vía online: plataforma zoom.

Narda Carrasco, de la Gerencia de Investigación y Aprobación Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), 7 de abril de 2022, vía online: plataforma zoom.

Franco Fuica, Socie de Organizando Trans Diversidades (OTD Chile), 10 de junio de 2022, vía online: plataforma zoom.

Luisa Rebeca Garza López, Directora Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), 18 de abril de 2022, vía online: plataforma zoom.

Marlon Pabón, Coordinador de Administración Pública y Transparencia de Misión de Observación Electoral (MOE), 4 de abril de 2022, vía online: plataforma zoom.